

Chulavitas, Pájaros y Contrachusmeros. La violencia para- policial como dispositivo antipopular en la Colombia de los 50.

Gina Paola Rodriguez.

Cita:

Gina Paola Rodriguez (2013). *Chulavitas, Pájaros y Contrachusmeros. La violencia para- policial como dispositivo antipopular en la Colombia de los 50. XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-010/487>

**XIV Jornadas
Interescuelas/Departamentos de Historia
2 al 5 de octubre de 2013**

ORGANIZA:

Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras

Universidad Nacional de Cuyo

Número de la Mesa Temática: 58

Título de la Mesa Temática: Orden, conflicto y violencia en América Latina en el siglo
XX

Apellido y Nombre de las/os coordinadores/as: Lorena Soler, Verónica Giordano, Igor
Goicovic

CHULAVITAS, PÁJAROS Y CONTRACHUSMEROS
LA VIOLENCIA PARA-MILITAR COMO DISPOSITIVO ANTIPOPULAR EN
LA COLOMBIA DE LOS 50

Gina Paola Rodríguez

IEALC- UBA/CONICET

paolarodriguez1789@yahoo.com

Durante el día los militares andaban por los torrentes de las calles, con los pantalones enrollados a media pierna, jugando a los naufragios con los niños. En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culetazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos.

Gabriel García Márquez

Cien Años de Soledad

Introducción

Desde mediados de 2012 los colombianos estamos a la expectativa de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC-EP. Se trata de un nuevo intento por lograr la desmovilización e ingreso a la vida política de una guerrilla que ya ha transitado por dos procesos de paz sin ningún éxito. Buena parte de estos fracasos se relaciona con la dificultad de los distintos gobiernos para dar una solución definitiva al problema de la tierra y la pobreza en Colombia, a los aspectos conflictivos referidos a la responsabilidad de las FARC en el tráfico de drogas y la violación de DDHH, y la histórica falta de garantías para que los desmovilizados no sufran un proceso de exterminio sistemático en su paso a la vida civil que termine tirando por tierra una lucha insurgente de más de cinco décadas.

Otro factor de peso en estos fracasos sucesivos ha sido la presión ejercida sobre las negociaciones por militares y sectores de derecha que ven con malos ojos cualquier tipo de concesión al grupo guerrillero; una negativa que hunde sus raíces en la convicción de que no es necesario negociar políticamente con el enemigo cuando puede derrotárselo militarmente. Este optimismo militarista se explica en una guerra contrainsurgente cuya performance ha incluido tácticas *non-sanctas* como el paramilitarismo y el ataque indiscriminado a la población civil. Sin lugar a dudas, el mentado éxito militar sobre las

FARC se cifra tanto en la capacidad de las fuerzas regulares, como en la actividad creciente y sostenida de organizaciones de violencia privada que, en connivencia con las autoridades oficiales, han buscado disciplinar por la vía del terror a las poblaciones consideradas “disidentes” o “auxiliadoras”.

Lejos de ser un fenómeno reciente, la formación de estructuras paramilitares y el uso oficial de la violencia sistemática contra la población civil, son tácticas que se remontan a las primeras décadas del Siglo XX colombiano y que tendrán un momento de plena ebullición a mediados de los cuarenta.¹ En aquel momento, los conservadores apelaron a la violencia oficial y a la creación de fuerzas paramilitares en su esfuerzo por apuntalar una posición electoral erosionada y recuperar el terreno ganado por el Gaitanismo, - hecho que recusa la tesis de que el inicio de la violencia data de 1948-. La violencia disminuyó parcialmente hacia finales de 1947 cuando Jorge Eliécer Gaitán fue elegido por voto popular como Jefe del Partido Liberal, y se reactivó e intensificó tras su asesinato en abril de 1948. El Bogotazo y sus réplicas en el interior del país no lograron derrocar al gobierno conservador de Ospina Pérez pero sí desencadenar una etapa sangrienta de enfrentamientos que se extendió hasta 1958. La ira “nueveabrileña” generó pánico en la élite colombiana perteneciente a ambos partidos, desatando una cruzada antipopular que persiguió y reprimió sin distinción a gaitanistas (liberales y conservadores), comunistas, sindicatos, ligas agrarias y todos aquellos considerados como amenazas al *status quo*. Para las oligarquías nacionales no bastaba con haber aplastado la rebelión en Bogotá y las provincias: era necesario eliminar toda posibilidad de que este tipo de hechos se repitiera y más aún, se convirtiera en algo más peligroso.

La presente ponencia reconstruye los pormenores de la cruzada que buscó impedir la articulación de la protesta campesina y obrera con la oposición política en Colombia a mediados de los 40. Sostendremos que en dicha empresa se entrelazaron la *violencia oficial*, “ejercida por las instituciones dominantes, o sus agentes, para reprimir la rebeldía popular nacida de sus condiciones de explotación y de injusticia” (Gaitán, 1985) y la *violencia paramilitar*, ejecutada por organizaciones de civiles armados con miras a la reconversión política y/o eliminación física de la población opositora. Estas a su vez, estuvieron acompañadas por una *violencia discursiva* a través de la cual los líderes de las colectividades partidistas y la Iglesia Católica instigaron el enfrentamiento

¹ Recordemos que durante la Hegemonía Conservadora (1886- 1930), las armas de la República se emplearon para asesinar a los trabajadores, como sucedió en la Masacre de las Bananeras. Después, durante el primer gobierno de la Hegemonía Liberal -Enrique Olaya Herrera (1930- 1934)- se persiguió crudamente a los conservadores.

fratricida entre “los de abajo” haciendo uso del apego atávico e inconsciente del pueblo a los dos partidos tradicionales para desarticular cualquier intento de revuelta popular (Perea, 1996).

El dispositivo antipopular incluyó la violencia oficial con miras a la desarticulación del movimiento popular, a través de una policía purgada de todo elemento liberal y re-nutrida por efectivos de municipios ultraconservadores: la “*Chulavita*”; y la creación de organizaciones paramilitares de reconversión política y exterminio sistemático como los “*Pájaros*” y los “*Contrachusmeros*”. Estas últimas fueron organizaciones ilegales de civiles armados dedicadas al asesinato selectivo de militantes liberales y a la “conservativización” de burocracias y poblaciones a lo largo del país. La acción paramilitar se extendió más allá de los cincuenta de manera paralela a los intentos pacificadores del General- Presidente Rojas Pinilla. Una vez amnistiados los guerrilleros liberales, se conformaron bandas armadas encargadas de impedir el regreso de los guerrilleros amnistiados a sus pueblos y parcelas y asesinar a los líderes desmovilizados.

El curso violento que tomó la política colombiana a partir de 1945 reflejó el entrecruzamiento conflictivo de tres fenómenos: el avance de un movimiento popular incipiente que reclamaba la realización de las mejoras sociales prometidas por el corporativismo liberal en la década del 30; el desmonte, por parte de las elites políticas, de la ideología de intervención estatal en pro de una claramente liberal capitalista que se acompañó de una ofensiva antipopular y anticomunista; y la radicalización de las formas de interacción política que transitaron de la competencia electoral a la adversidad política y de ésta al exterminio recíproco. En lo que sigue analizaremos esta experiencia enmarcándola en el contexto ampliado de la ofensiva antipopular y anticomunista que se gesta en aquellos tiempos en América Latina.

1. El desmonte de la ideología corporativista

Colombia estuvo a punto de dar un giro político radical a mediados de la década del 30. Decimos a punto, porque la potencialidad reformista de la *Revolución en Marcha* de López Pumarejo, quedó justamente en eso, una potencia. Aunque la apuesta inicial de López apuntó a una modernización del país en la que el Estado asumiera un papel protagónico en la protección de los ciudadanos, el resultado final fue un Estado centrado en el desarrollo económico pautado por las clases dominantes que instrumentalizó el

apoyo social solo en coyunturas electorales (Kalmanovitz, 1986). La enorme distancia que separaba a las élites liberales y conservadoras acerca de la manera de concebir el papel del Estado, la economía y el tratamiento de los trabajadores terminó acortándose y volviéndose contra López en los años posteriores a la reforma, evidenciando el peso de la oligarquía en el régimen político colombiano y la persistencia de formas tradicionales de actividad política (Piccoli, 2005). El conjunto de medidas orientado a reducir los enfrentamientos obrero- patronales en el campo y la ciudad, a partir de la otorgación de un mínimo de garantías a los sectores subalternos, pronto despertó la oposición de la Iglesia y de las élites de ambos partidos que se unificaron en torno a un proyecto autoritario contra la intervención que terminó dejando sin piso la mayor parte de medidas emprendidas en 1936.² El propio López Pumarejo reconocería años más tarde, que los vetos impuestos por estos sectores a la “Revolución en Marcha” terminaron haciendo de esta un proyecto truncado:

Mi primer gobierno tomó la iniciativa de proponer al Congreso Liberal la enmienda constitucional, y entonces se vio, fácilmente, como no era cierto que los voceros del liberalismo estuvieran tan distanciados filosófica y jurídicamente del pensamiento original de 1886 (...) La Reforma de 1936 fue una refriega indecisa entre la audacia y la cautela. Solamente en lo relativo a la libertad de enseñanza y de conciencia rompió una vertebra del estatuto. Sin embargo, se promovió desde fuera del Congreso una reacción amenazante y se habló de desconocer el imperio de esa legislación. Se la tachó de comunista, de disolvente de la sociedad colombiana, de atea, de corruptora (...) Lo cierto es que en el Congreso homogéneo se fue descubriendo, a medida que avanzaba el estudio, que no había ningún anhelo popular representado en las Cámaras, ni fuera de ellas, exigiendo imperativamente que la conformación del Estado se sustituya por otras. El régimen presidencial, las facultades y limitaciones del Congreso, la organización de la justicia, no fueron tocados. La reforma quedó trunca principalmente porque el liberalismo no quiso entonces declarar que su programa no contenía esa revolución institucional, y no se contentó tampoco con hacer enmiendas prácticas, exigidas, ellas si, por la opinión nacional... (López Pumarejo, 1945)

No fue necesario esperar el ascenso de los gobiernos conservadores para presenciar los primeros brotes de violencia. El liberal Alberto Lleras Camargo no sólo finalizó el segundo periodo presidencial de López Pumarejo, sino que terminó con el régimen corporativista que inspiró la “Revolución en marcha”. Del compromiso entre élites

2 En el primer año de gobierno de López, un grupo de empresarios, mayoritariamente liberales, creó una organización de carácter gremial para oponerse a las reformas: la APEN. Con un discurso liberal, la APEN se oponía a cualquier intervención estatal. Con un desempeño electoral modesto, la APEN cumplió una función de oposición más bien simbólica, aunque sirvió para coordinar la respuesta patronal a las demandas de los trabajadores. Sobre el papel jugado por esta asociación ver: Archila, (1992)

burguesas y clases populares se pasó a la represión sindical.³ Entre 1945 y 1950, luego de una ofensiva estatal que incluyó medidas como la ilegalización de huelgas, la represión militar a manifestaciones obreras, la suspensión de la personería jurídica de la CTC, los despidos de trabajadores y el estímulo al paralelismo sindical⁴, “el sindicalismo desapareció como referente simbólico para numerosos sectores, los cuales quedaron entonces a merced de la confrontación política sectorial partidista” (Medina, 1989: 24). El bipartidismo demostró que no toleraba actores políticos intermedios y logró un punto de encuentro con las élites económicas acerca de la necesidad de desmontar el esquema de intervención estatal lopista en aras de la adopción de un modelo liberal de gestión económica y social.

Desde entonces, las banderas de la modernización, ya no capitalista, sino popular, serían tomadas por Jorge Eliécer Gaitán en un movimiento antioligárquico que aglutinaría las demandas de la población más pobre y excluida y que generaría el fraccionamiento interno del liberalismo. Hasta 1945 el movimiento gaitanista no había entrado aún en una etapa de definiciones sobre la toma del poder. Se habían adelantado luchas sindicales y de reivindicación en otros campos de interés para las masas populares. Las elecciones de 1946 se toparon con un Partido Liberal dividido entre los seguidores de Gabriel Turbay, un burgués de centroderecha respaldado por el principal periódico nacional – El Tiempo- y Gaitán, “hombre de piel oscura y cuna humilde, [que] simbolizaba no sólo la emergencia social de lo mestizo, urbano y popular en la sociedad colombiana, sino además el surgimiento de políticos que no pertenecían a la élite” (Roldán, 2003:39). La lucha entre los dos candidatos terminó dándole el triunfo al candidato conservador, Mariano Ospina Pérez -aún cuando su fuerza electoral era minoraría- a la vez que ratificó la enorme acogida de Gaitán entre los electores.⁵

2. La ofensiva antipopular y anticomunista

³ El escenario de esta transformación fue la huelga de los trabajadores del río Magdalena agrupados en Fedenal, en diciembre de 1945. La declaración presidencial respaldó la intransigencia patronal y avaló la represión militar a los huelguistas. Los voceros de los gremios patronales y los dirigentes de los partidos aplaudieron la conducta oficial. (Medina, 1989:23). El conflicto del río Magdalena fue la oportunidad para que el Gobierno mostrara a los trabajadores y a la opinión pública cuál sería en adelante el tratamiento oficial de las relaciones obrero-patronales y la posición hacia la organización sindical.

⁴ “El paralelismo sindical se expresó en protección a la fundación de una nueva central obrera, la UTC, que surgió bajo los auspicios de la Iglesia el 16 de junio de 1946 y fue reconocida legalmente en 1949 luego de que el gobierno del Presidente Ospina, mediante el Decreto 2785, derogara las disposiciones que prohibían el paralelismo sindical” (Medina:1989:23)

⁵ Las cifras al respecto son ilustrativas: Turbay con 440.591 votos y Gaitán con 358.957 sobrepasaban juntos a Ospina que consiguió 565.260. De haber mermado el enfrentamiento otra hubiese sido la historia.

Frente al crecimiento político del gaitanismo se perfilaron dos políticas de parte de la oligarquía liberal-conservadora: coalición por arriba en la llamada Unión Nacional -que repartía equitativamente los ministerios entre liberales y conservadores- y ofensiva violenta contra los sectores populares que apoyaban al gaitanismo (liberales y conservadores). Aunque era evidente que la jefatura del Partido Liberal debía ser para Gaitán, ya que sólo así se lograría el retorno del liberalismo a la Presidencia, la derecha del partido (santismo) veía con resquemor tal arribo. El agitación popular producido por Gaitán era un motivo de preocupación no sólo para los conservadores sino también para la oligarquía liberal que veía con temor el ascenso de un líder que encendía al pueblo en su contra. Sus ideas socialistas (nacionalización de la banca, cervercerías y servicios públicos), despertaban también suspicacias en el Embajador norteamericano en Bogotá, quien advirtió sobre su “peligrosidad” al Departamento de Estado: “Los Estados Unidos deben observarlo con cuidado y tacto. Puede ser que vuelva al camino correcto y sea de gran ayuda [...] También puede convertirse fácilmente en una amenaza, o al menos, en una espina clavada en nuestro costado” (Citado por Ramsey, 1981). Hasta los comunistas avistaron la subida de Gaitán como una amenaza señalando que “Gaitán es un aventurero peligroso con rasgos fascistas” (Diario Popular, 11 de abril de 1946).

El 14 de julio de 1947 Gaitán fue proclamado Jefe Único del Partido Liberal por la Junta de Parlamentarios ratificando la plataforma política que se había aprobado previamente por voto popular. Estatutariamente, el partido liberal era ahora el partido del pueblo. En ese momento empezó a hacer agua la voluntad conciliadora propuesta de la Unión Nacional y la intolerancia hacia el gaitanismo pronto redundó en la persecución y la eliminación física de sus seguidores. Así, los cuatro procesos electorales que se adelantaron entre 1946 y 1950⁶ estuvieron marcados por un aumento inusitado en la tasa de homicidios⁷. La violencia oficial giró en torno a tres objetivos: lograr el dominio electoral del conservatismo, reemplazar a los liberales que habían sido nombrados en cargos burocráticos y marginar a los trabajadores agrupados en la CTC. Se trató de una violencia selectiva y esporádica complementada con acoso oficial, fraude e intimidación (Roldán, 2003). Al interior, las dirigencias de ambos partidos tendieron a diferenciarse cada vez menos, dos factores las aglutinaron: la percepción de

⁶ Elecciones parlamentarias en marzo 1947, para Concejos municipales en octubre de 1947, parlamentarias de nuevo en junio de 1949 y presidenciales en marzo del mismo año.

⁷ Según cifras de Oquist (1978), las víctimas de la violencia ascendieron a 127. 297 entre 1947 y 1950, siendo este último año el más sangriento con más de 50 mil muertos.

Gaitán como un enemigo común, y la necesidad de desmontar la ideología intervencionista para garantizar el rendimiento del capital. Hacia fuera, por el contrario, aumentaba la polarización política incubando en los sectores subalternos el odio fratricida. En tiempos de la Unión Nacional, la afiliación política constituía, paradójicamente, el aspecto determinante de la sociedad colombiana, pues dividía no solamente a los trabajadores y campesinos sino también a sectores ajenos a los procesos de producción, como las mujeres, los ancianos y los niños.

El 5 de octubre de 1947, el Partido Liberal con Gaitán como jefe único, obtuvo una aplastante victoria en los comicios electorales para concejos. El caudillo, como el resto del país, sabía que su triunfo en las próximas elecciones presidenciales estaba asegurado. Entonces la persecución popular empezó a arreciar. Siguiendo la línea de la Doctrina Truman, el Gobierno de Ospina comenzó a aplicar la violencia "de baja intensidad" en los campos y pueblos para impedir el triunfo de Gaitán, desmovilizar a las masas campesinas, anular la capacidad de resistencia del pueblo y recuperar el control de la tierra para el gran latifundio. En las urbes, la arremetida se dirigió al desmantelamiento del movimiento obrero: "despidos sindicales, purga y encarcelamiento de dirigentes, escamoteo a la huelga como instrumento legítimo de reclamación, destrucción sistemática de la unidad sindical" y en general, fortalecimiento del Estado "como brazo derecho del capital" (Sánchez, 1989:136). La represión fue tal que, a inicios de 1948 al saberse la noticia de la masacre de liberales en varios pueblos del país a manos de conservadores, Gaitán organizó manifestaciones multitudinarias entre las que se destacaron la "*Marcha de las Antorchas*" y la "*Marcha del Silencio*" donde elevó su voz para protestar contra los crímenes oficiales y advertir a las élites que el pueblo "podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa" (Gaitán, 1948).

El principal dispositivo empleado en esta primera etapa fue la violencia oficial. Se operó una purga al interior de la policía para eliminar de esta todo rezago liberal. En adelante, la fuerza pública estaría compuesta exclusivamente por efectivos conservadores extraídos de poblaciones ideológicamente afines. La *policía chulavita*, llamada así por el gentilicio de sus miembros, -habitantes de la vereda Chulavita en el municipio de Boavita, Boyacá- se creó con el objetivo de neutralizar todo tipo de organización política con ideologías diferentes a la del gobierno conservador. En 1946 comenzaron a operar las partidas de "Chulavitas" "encargadas de quitarle la cédula de identidad a cada campesino liberal, por la razón o la fuerza, para impedir que votara por Gaitán. Según Vidales (1997), "la estrategia era más profunda: se trataba de iniciar la violencia

generalizada "por abajo", por el campesinado pobre, de manera que cuando llegara a los "notables" fuera ya demasiado tarde para responder". Los Chulavitas cumplieron su misión con eficacia persiguiendo ferozmente a liberales, comunistas, masones y ateos, inicialmente en regiones típicamente conservadoras como Boyacá, Antioquia y Nariño, y después en zonas con predominio liberal como Tolima, Valle y el Viejo Caldas. Devenida una fuerza siniestra, la policía chulavita fue sinónimo de terror, masacres y muerte:

Una corbata, una camisa o una puerta roja eran una invitación a la muerte. Como también lo era cargar una cédula que llevara el registro de determinadas elecciones (...) Comisiones de policía y del ejército llegaban en ciclones a pueblos y veredas inermes (...) En una operación de "pacificación" a lo Morillo, el ejército dejó, según registros del médico conservador Parra y del líder social liberal Luis Eduardo Gómez, reafirmados por el historiador norteamericano James D Henderson, un número estimado de mil quinientos cadáveres en la región rural (...) del Líbano, Tolima. (Sánchez, 1989:140).

Con el apoyo de caciques y terratenientes laureanistas, los "chulavitas" iniciaron "una guerra selectiva, soterrada y nocturna contra núcleos gaitanistas y liberales, introduciendo una serie de prácticas de hostigamiento y exterminio, como las masacres de población civil indefensa, el chantaje, las "aplanchadas" con la parte plana del machete, los mensajes anónimos y amenazantes y la incineración de ranchos y parcelas" (Uribe, junio 1991). Al tiempo que la violencia desangraba el país, un tono intimidatorio acosaba a los obreros y campesinos inclinados a hacer la huelga o reclamar la Reforma Agraria. Se trataba, como señala Gonzalo Sánchez "de una situación eminentemente conflictiva pero no necesariamente revolucionaria" (1989:128). Faltaba un detonante para la explosión popular: el magnicidio de su líder.

Como ya ha sido numerosas veces registrado, el mismo día del asesinato de Gaitán, se producía en Bogotá la IX Conferencia Internacional Americana, que tenía como invitado principal al Secretario de Estado norteamericano Georges Marshall y de cuya comitiva había sido excluido el caudillo liberal. La Delegación colombiana estaba compuesta por miembros de ambos partidos y encabezada por el ultraconservador Laureano Gómez – quien hasta hace poco renegaba de la política yanqui para alinearse del lado del nazismo y el fascismo-. Cabe destacar que la colaboración de las autoridades colombianas con el proyecto estadounidense venía gestándose desde antes, de hecho, el marco estatutario del TIAR había sido redactado por el ex presidente y embajador en Washington Alberto Lleras Camargo; y fue Colombia el primer país en firmar un convenio militar con Estados Unidos bajo el sello de la seguridad hemisférica. Para no

dejar dudas de la confianza estadounidense en la oligarquía colombiana se nombró a Lleras Camargo como el primer Secretario General de la OEA.

En reacción a la visita de las autoridades estadounidenses se había venido preparando días antes una Conferencia que aglutinaba a la izquierda latinoamericana y en la que participaría el entonces estudiante Fidel Castro. Gaitán salía al encuentro con los cubanos acompañado de varios amigos en el momento en que encontró la muerte a manos de Juan Roa Sierra. El propio Fidel visitaría horas más tarde a la Junta central Revolucionaria convocada por los gaitanistas, “derivando en la conclusión de que nadie sabía cómo se hace la revolución” (Vázquez Carrizosa, 1992: 71). Como en una especie de profecía cumplida, el 10 de abril se tuvo noticia de que la burguesía liberal había sellado un pacto de colaboración con el gobierno conservador de Ospina, gracias al cual le fueron otorgados varios ministerios. La situación la aprovechó el gobierno para lanzarse a la ofensiva, persiguiendo a los gaitanistas que, ya sin un jefe, se encontraron desamparados, obligados a "irse al monte" para transformarse paulatinamente en guerrilleros.

Lo que resulta increíble es la respuesta del gobierno conservador ante la pregunta por la autoría del asesinato de Gaitán: “a Gaitán lo mataron los comunistas”. Para reafirmar semejante juicio, y sin una sola prueba, Colombia rompió sus relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Días después serían de público conocimiento las resoluciones emanadas de la IX Conferencia redactadas y presentadas por la delegación colombiana:

Que por su naturaleza antidemocrática y su tendencia intervencionista, la actividad política del comunismo internacional o cualquier doctrina totalitaria es incompatible con el concepto de libertad americana [...] De cada país del Continente se debe erradicar o impedir actividades [...] que tiendan a derrocar sus instituciones por fuerza, o a fomentar desorden en su vida política doméstica [...] (Gilhodes, 1985)

El asesinato de Gaitán fue usado como una “prueba fehaciente” de la amenaza que representaba el comunismo para la paz, la democracia, la libertad y el cristianismo en Colombia y el mundo. A partir de allí, toda disonancia del discurso conservador era asociada con el monstruo comunista. Las acusaciones de comunismo se lanzaban libre e indiscriminadamente cada vez que el *status quo* parecía amenazado o cuando se alzaban los sectores populares, con independencia de cual fuera su filiación ideológica. El fantasma del 9 de abril preocupaba profundamente a las élites colombianas. Para los

conservadores, no bastaba con haber aplacado los levantamientos y sometido a su dirigencia en Bogotá a un pacto de convivencia, sino que era necesario garantizar su no repetición. El 7 de agosto de 1950, el candidato único Laureano Gómez se posesionó como Presidente para los próximos cuatro años. El mandatario anunció el establecimiento de un nuevo orden en el país a través de una Asamblea Nacional Constituyente y manifestó que su gobierno sería pro norteamericano, pro Naciones Unidas, anti comunista y anti violencia. Mientras algunos sectores conservadores esperan cambios económicos favorables con la llegada de Gómez al poder, los antiguos gaitanistas temían- y con razón- un recrudecimiento de la violencia que ya ha cobrado miles de víctimas. Parecía que la retaliación conservadora estaba más que organizada con la fuerza pública alineada ideológicamente y un sector de la Iglesia Católica adoctrinando a su servicio. Pero cuando esto pareció insuficiente, el conservatismo dio un paso más buscando la eliminación definitiva de la oposición política en condiciones de total silencio e impunidad. Esta tarea estuvo a cargo de “*Los Pájaros*”, agrupaciones de civiles armados, más efectivas y sanguinarias que la policía conservadora, que buscaban controlar las poblaciones de oposición través de la persecución y el sicariato.

Apodados así por su *modus operandi*, los pájaros actuaron como grupos de matones que eran “movilizados para amedrentar, presionar y asesinar” liberales y luego desaparecer en medio del manto de distracción “tendido por directorios conservadores, autoridades y funcionarios públicos” (Betancourt y García, 1990: 20). Los “pájaros” actuaron principalmente en el departamento del Valle del Cauca y Caldas, y fueron replicados por otros grupos como los "aplanchadores" en Antioquia y los "penca ancha" en las sabanas de Sucre. Estos grupos sicariales, serían utilizados para homogeneizar pueblos, cambiar conciencias, convertir a radicales liberales, perseguir a protestantes y atacar a masones, comunistas o cualquier otra fuerza opuesta al conservatismo; pero también, para resolver los conflictos sobre la tierra a favor de los más poderosos. Los pájaros no solo contaron con el guiño y protección de la policía y las autoridades civiles, sino que debieron a estas su creación. En el Valle del Cauca, por ejemplo, el gobernador Nicolás Borrero Olano fue quién convocó a ganaderos, miembros de los gremios y hacendados, para proponerles la creación de un cuerpo de policía privada. Corría el mes de octubre de 1949 cuando se reunieron los invitados en la Gobernación del Valle, y el gobernador planteó la urgente necesidad de crear un cuerpo propio de policía “con unas trescientas unidades, pagadas y dotadas con fondos de los propietarios [...] esta policía dependería de una junta que presidiría el gobernador y que estaría integrada por varios ganaderos y agricultores del departamento” (ibíd., 15-76).

Ahora bien, ¿quiénes componían los nidos de Pájaros? En contra de lo que dictaría el sentido común, los pájaros no pertenecían a sectores pobres o desfavorecidos del campesinado, sino que hacían parte de una clase media en ascenso dedicada a actividades comerciales y de servicios. Según relatan Betancourt y García (1990) “las profesiones y oficios más comunes de los “pájaros eran las de chóferes, carniceros, fonderos, cantineros, talabarteros, sastres, lavanderos, sacristanes, cacharrereros, jornaleros o lungos, matarifes, inspectores de policía, policías y empleados de la alcaldía o el juzgado municipal” (112-113). Tales dedicaciones, permitían a los pájaros contar con tiempo libre para su actividad mercenaria, y entrar en contacto cotidiano con una gran cantidad de vecinos para informarse sobre sus víctimas. Además de “hacer inteligencia” y eliminar a los opositores, los Pájaros ejercieron funciones punitivas sobre aquellas poblaciones que suscribían el credo liberal a través de un control social informal. La represión contra los nueveabrileños, tomó dimensiones insospechadas. En las áreas urbanas se procedió al silenciamiento de la clase obrera a través de la prohibición de huelgas y reuniones políticas y la ocupación de sedes sindicales. En el campo, el terror generalizado buscó eliminar las aspiraciones democráticas del campesinado frente al poder terrateniente. Torturas, homicidios individuales y colectivos, cometidos en forma atroz, con sevicia y excesos de crueldad se volvieron el pan de cada día. Se acudió a la utilización del ejército para asesinar a los liberales, despojarlos de sus tierras y bienes, incendiar sus casas, trapiches y beneficiaderos y racionar sus alimentos, al tiempo que la coacción física se descargó sobre los trabajadores rurales descontentos obligando su migración masiva a las ciudades o su desplazamiento a otras zonas de su misma filiación partidista.

Los Pájaros recibían contraprestaciones económicas según el rango de sus víctimas, sin embargo, los más beneficiados con su acción homicida fueron los grandes propietarios rurales y urbanos, amparados en la impunidad garantizada por notarios y jueces, a veces amedrantados y otras confabulados con los delincuentes. Las víctimas eran señaladas e incluso notificadas con anterioridad ante las miradas inermes del resto de la población, que observaba como los pájaros discutían sus planes de muerte en cafés y bares públicos. La muerte devenía así una compañía cotidiana: los muertos apilados en la ribera del río Cauca, y la siniestra “volqueta roja” que recorría las calles del eje cafetero recogiendo cadáveres todas las mañana, se hicieron parte del paisaje.

El más famoso de los Pájaros fue León María Lozano, más conocido como “El Cóndor”. Nacido en Tuluá, departamento del Valle, este hombre regentó la principal

banda de asesinos florecida en la región entre 1948 y 1953. La figura de Lozano ha trascendido en la historia nacional gracias a la novela de Gustavo Álvarez Gardeazábal, "*Cóndores no entierran todos los días*" (1975), y a la película de Francisco Norden (1984) del mismo nombre. Allí se recrean las andanzas de un conservador sectario y católico fanático que se convirtió en el legendario jefe de los asesinos el 9 de abril de 1948 al impedir que los liberales incendiaran el colegio de los curas salesianos en Tuluá y que atacaran a los sacerdotes. Con el beneplácito de los jefes conservadores y con una que otra carabina que aquellos le entregaron fue ascendiendo en la jerarquía del crimen como cruzado católico y conservador.

Lozano y otros conservadores se unieron a la patrulla del ejército que recuperó el palacio municipal tomado por los liberales el 9 de abril de 1948. Luego Lozano organizó una policía cívica, autorizado por Gustavo Rojas Pinilla, entonces comandante de la Tercera Brigada en Cali, para evitar que los liberales tumbaran el gobierno. Inicialmente se trataba sólo de asustar al liberalismo: de crear pánico, sin matar a nadie. Pero en 1952, ya era *vox populi* en el Valle del Cauca que Lozano era el jefe de un grupo de hombres que asesinaban, incendiaban casas y pueblos e invadían a los tiros los centros de reclusión para liberar a sus amigos detenidos. La colaboración de estos grupos de civiles armados con políticos y miembros de las Fuerzas Armadas, ha sido revelada por diversas investigaciones periodísticas que han puesto de presente la estrecha relación entre Gustavo Rojas Pinilla, quien sería presidente de la República entre 1953 y 1956, y el Pájaro Lozano (Galvis y Donadío, 1988)

Cuando las atrocidades de León María Lozano alcanzaron un nivel inocultable, las autoridades del Partido Conservador decidieron enviarlo a la ciudad de Pereira para protegerlo a él y a la imagen del partido, y le asignaron una pensión por los servicios prestados. Una vez allí, sería asesinado por sicarios enviados por los liberales. Si bien la muerte del Cóndor debilitaría las organizaciones de los "pájaros" como aparatos con estructura y apoyo político por parte de las autoridades y agentes locales del Estado, estas seguirían operando hasta la década del sesenta en la modalidad de sicariato a sueldo. Quedarían así en el recuerdo los "pájaros veredales", aquellos fanáticos partidistas que reivindicaban en sus acciones una plena convicción ideológica. Increíblemente, 50 años después de su muerte, Lozano fue honrado por miembros notables de la sociedad valluna y el partido conservador en octubre de 2006: "Con una misa en la iglesia de La Resurrección del Colegio Salesiano, donde están los restos de Lozano conocido como el 'Cóndor', sus familiares recordaron los 50 años de su muerte

(...) La iglesia se llenó, estaba todo el directorio conservador en pleno, encabezado por su presidenta Lucila Cárdenas de Velásquez”. (El Tiempo, 15 de octubre de 2006).

Más allá del halo fantástico creado por la ficción literaria y cinematográfica, la figura de Lozano es central para comprender los mecanismos de operación de la violencia oficial a mediados del Siglo XX. En su accionar se entrecruzan violencias que obedecen a diferentes tipos de intereses: una violencia socio-económica que busca inclinar la balanza a favor de propietarios y terratenientes; una violencia ideológica sectaria que defiende con sangre el color del partido; y una violencia cultural que expresa la resistencia de los sectores más tradicionales de la nación a los procesos de modernización. La violencia institucional y paralegal fue el mecanismo escogido por los gobiernos conservadores para lograr el control social y político en las regiones liberales, a partir de la homogenización ideológica y política de la población. Las operaciones de "pacificación" adelantadas por la policía y el ejército en pueblos y veredas dejaron un cuantioso saldo de víctimas y crímenes que quedaron en la impunidad dada la complicidad de las autoridades y jefes políticos en los hechos. El Cóndor no era el único “pájaro” que exterminaba impunemente a los liberales sin que las autoridades departamentales se inquietasen, en el norte del Valle también resonaban los nombres de “Lamparilla”, “Turpial” y el “Pájaro Azul”. El Viejo Caldas y el Tolima, fueron escenarios centrales de la confrontación, pero no por ello los únicos: también Boyacá, los Santanderes y Antioquia padecieron estas prácticas criminales de homogeneización, al tiempo que atravesaron procesos de expropiación y reconfiguración de las relaciones de tenencia y propiedad por la vía de la violencia. “Se iba creando un vacío de ley que era llenado por bandas armadas de los dos partidos, en un proceso de desdibujamiento del Estado, sus códigos, sus jueces y sus fuerzas del orden”. (Vázquez Carrizosa, 1992: 93)

La experiencia de los Pájaros del Valle del Cauca tuvo su análoga en el Departamento de Antioquia con los *Contrachusmeros*, grupos paramilitares compuestos por civiles conservadores apoyados y armados por sectores del gobierno departamental, aun cuando la violencia en Antioquia guarda características particulares. Según Roldán (2003), el surgimiento de la violencia en éste departamento no fue el resultado de la diseminación monolítica, coherente y vertical de odios partidistas heredados, ni tampoco el resultado de una estrategia o mandato del gobierno central, sino un catalizador que hizo aflorar otros conflictos locales creando oportunidades para que los sectores marginales emprendieran su lucha por el poder. Más importante aún, “la

Violencia representó una lucha fundamental – y el máximo fracaso- por imponer un proyecto de régimen departamental hegemónico, basado en nociones de diferencias culturales, étnicas y raciales” (ibíd.: 50) y no únicamente partidistas.

El uso de la fuerza pública para acosar y reprimir a los trabajadores se hizo rutinario. En Antioquia, las autoridades regionales adquirieron el hábito de desplegar agentes de policía para dispersar las huelgas y proteger la propiedad privada contra los intereses de la fuerza laboral. Aumentaron los ataques dirigidos por los conservadores en puestos departamentales oficiales contra los trabajadores del sector público. Tras la muerte de Gaitán, la represión policial de los liberales empezó a ser insuficiente, por lo que el gobierno departamental transfirió el monopolio de la violencia a organizaciones paramilitares compuestas por miembros de la policía local y voluntarios civiles conservadores. El gobernador Arango Ferrer – nombrado por el Presidente Ospina al día siguiente del magnicidio- no sólo autorizó su creación sino que les entregó armas y financió su sostenimiento: “la policía civil auxiliar sería pagada, bien mediante fondos extraordinarios aprobados por los concejos municipales locales, o donde el concejo municipal se negara a cooperar, con dineros provenientes de las aduanas y el impuesto al monopolio regional del licor” (ibíd.: 103). Además convocó a los notables conservadores de la región para decidir las tácticas de contención de la revuelta popular y nombró dentro de su gabinete a reservistas conservadores destacados en la organización de patrullas rurales de civiles armados en el nivel municipal. Un dato interesante aportado por Roldán es que fueron muy pocos los trabajadores movilizados en la capital departamental para protestar por la muerte de Gaitán, y sin embargo, las protestas aisladas que se adelantaron en las zonas rurales sirvieron de excusa para el acoso y despido masivo de los empleados públicos de todo el departamento. Este hecho permite entrever que lo que estaba en juego excedía en mucho a la simple cuestión ideológico- partidista. So pretexto del “plan comunista” que se tejía en los municipios se justificó la violencia para recuperar el “orden” en todo el país, aun cuando en cada región los tantos se definieran en función de las componendas de poder local y los intereses de las clases dominantes.

Al mismo tiempo, se producía un sisma al interior del Partido Conservador entre ospinistas y laureanistas. Estos últimos, de una derecha aún más radical, cabildaron para aumentar su poder en el Directorio y despojar de su cargo a los ospinistas. La elección de Laureano Gómez como presidente acrecentó su influencia y habilitó el nombramiento de paramilitares conservadores en las burocracias departamentales y municipales. Con frecuencia se nombraron alcaldes con historial criminal o

involucrados en casos de homicidio y asalto: “Los alcaldes acusados a menudo mantenían sus cargos o simplemente eran trasladados a otro lugar. Así en algunos casos, individuos que en el pasado habían sido enviados a un municipio para aplacarlo y se habían ganado una reputación por aterrorizar a la comunidad y por cometer crímenes eran nombrados nuevamente cuando los asuntos locales requerían de nuevo una mano dura” (Roldán, 2003:128).

Reflexión Final

Al período de represión ejercida por los gobiernos conservadores en representación de las oligarquías liberales y conservadoras contra el pueblo, se le ha querido dar un carácter de simple enfrentamiento civil entre partidos. Tal acepción encubre, en primer lugar, el carácter de clase del conflicto y en segundo lugar, la responsabilidad estatal de buena parte de la violencia desatada. Si bien fue el pueblo raso el que puso las víctimas, fue el Gobierno a través de sus órganos militares y paramilitares el que encendió la llama. Las fuerzas que debían representar la autoridad y el orden se convirtieron en un actor más de la contienda respondiendo a intereses privados y particulares y no a la defensa de la nación.

La acción ejercida por Chulavitas, Pájaros y Contrachusmeros configuró un dispositivo antipopular de carácter paramilitar, esto es, un mecanismo que, aunque cercano a lo militar, terminó desviando, irregularizando y deformando la función de la milicia volcándola cruelmente contra el cuerpo social que, en teoría, debía defender (Giraldo, 2004). Dos factores favorecieron el giro hacia la estrategia paramilitar: la politización e ideologización de la Policía, que la condujo a usar la fuerza en defensa de los intereses de un sector de la sociedad y no en defensa del conjunto; y la vinculación de personal civil a la acción armada, que borró los límites entre civiles y militares desnaturalizando el lugar de ambos. El punto más alto de perversión de las instituciones se alcanzó cuando las fuerzas paramilitares terminaron autonomizándose hasta del propio Gobierno para cumplir tareas encargadas enteramente por el sector privado. Esto habilitó el paso a la acción clandestina y la concomitante evasión de responsabilidades por parte del Estado.

El término "La Violencia", así nombrado, descarga de compromisos al Estado colombiano y sus agentes en la muerte de miles de ciudadanos. Sustancializa los hechos de violencia presentándolos como una sumatoria anómica que se resiste a ser explicada o comprendida, y sustrae este hecho histórico del marco de la lucha de clases y la disputa por el poder público en el país. La llamada "Violencia" no fue una guerra civil

no declarada, ni mucho menos un enfrentamiento del Partido Conservador contra el Partido Liberal, fue una cruzada antipopular en la que oligarquía liberal- conservadora buscó extinguir las demandas sociales y mantener los privilegios de terratenientes y capitalistas, a la que se sumó una disputa por la hegemonía electoral y burocrática. Es necesario entonces recusar la opinión común que vincula únicamente a los conservadores como instigadores de la violencia. El análisis del periodo que va de septiembre de 1945 al 9 de abril de 1948, muestra que incluso ciudadanos de filiación conservadora fueron perseguidos sólo por el hecho de reivindicar los derechos de las clases subalternas.

Pasado un lustro del asesinato de Gaitán, Colombia parecía desangrarse en la lucha entre el gobierno conservador y los sectores de oposición. Estos últimos se hallaban en numerosas disputas internas: los liberales que se mantuvieron en resistencia civil contra aquellos que decidieron alzarse en armas y los guerrilleros liberales contra sus homólogos comunistas. También el Partido Conservador se encontraba fraccionado en tres sectores irreconciliables: laureanistas, alzatistas y ospinistas. La población agobiada por la violencia y expuesta a la expoliación de los grupos armados (estatales, insurgentes y bandoleriles) y a la falta de garantías políticas, estaba deseosa de un cambio, o cuando menos, un respiro. A la exasperación de todos los sectores, solo pareció dar respuesta un arreglo político desesperado: el golpe militar. He ahí el comienzo de una nueva tragedia.

Bibliografía

Álvarez Gardeazábal, Gustavo (1989). *Cóndores no entierran todos los días*, Bogotá: Plaza & Janés.

Archila, Mauricio (1992). *Cultura e identidad obrera. Colombia, 1910-1945*, Bogotá: Cinep.

Betancourt, Darío y García, Martha (1990). *Matones y cuadrilleros. Origen y evolución de la violencia en el occidente colombiano*. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales Universidad Nacional, Bogotá: Tercer Mundo.

Gaitán, Gloria (1985). “La guerra fría en Colombia: implicaciones de la CIA en los inicios de La Violencia”, en VVAA. *Once ensayos sobre la violencia*, Bogotá: Centro Gaitán, Fondo Editorial CEREC.

Gaitán, Jorge Eliécer (1948). “Oración por la Paz”, en *Jorge Eliécer Gaitán, Sus mejores escritos*, selección de Santiago Perry, Bogotá: Círculo de Lectores.

Galvis, Silvia Y Donado Alberto (1988). *El Jefe Supremo. Rojas Pinilla En La Violencia Y El Poder*. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial S.A.

Gilhodes, Pierre (1985). *Las luchas agrarias en Colombia*, Bogotá: ECOE.

Giraldo, Javier (2004). *El Paramilitarismo: una criminal política de Estado que devora el país*. Versión electrónica disponible en: <http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article76> Fecha de consulta: 07/05/2013

Guzmán Campos, Germán; Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna (1977). *La Violencia en Colombia*. Vol I y II. Bogotá: Punta de Lanza.

Kalmanovitz, Salomón (1986). *Economía y Nación*, Bogotá: Siglo XXI.

López Pumarejo, Alfonso (1945). *Sesiones extraordinarias de 1945 ante el Congreso*. Bogotá: Imprenta Nacional.

Medina, Medófilo (1989). “Bases urbanas de la violencia en Colombia”, en *Historia Crítica* N° 1, enero -junio de 1989, Bogotá: Universidad de los Andes.

Oquist, Paul (1978). *Violencia, política y conflicto en Colombia*, Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos, Biblioteca del Banco Popular.

Perea, Carlos Mario (1996). *Porque la sangre es espíritu: Imaginario y discurso político en las élites capitalinas (1942-1949)*, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Editorial Santillana.

Piccoli, Guido (2005). *El sistema del Pájaro. Colombia, paramilitarismo y conflicto social*, Bogotá: ILSA

Ramsey, Russell (1981). *Guerrilleros y soldados*, Bogotá: Editorial Tercer Mundo.

Roldan, Mary (2003). *A sangre y fuego. La violencia en Antioquia, Colombia 1946-1953*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Fundación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología.

Sánchez, Gonzalo (1989). “Violencia, Guerrillas y Estructuras agrarias”, en *VVAA. Nueva Historia de Colombia*, Tomo II, Bogotá: Editorial Planeta, 1989, pp. 127- 152.

Uribe de Hincapié, María Teresa (Junio 1991). "Violencia y masacres en el Tolima: desde la muerte de Gaitán al Frente Nacional", en *Revista Credencial Historia*, Bogotá, Edición N° 18. Disponible en versión electrónica en: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/junio1991/junio2.htm>

Fecha de consulta: 16/05/2012

Vázquez Carrizosa, Alfredo (1992). *Historia Crítica del Frente Nacional*, Bogotá: Ediciones Foro Nacional por Colombia.

Vidales, Carlos (1997). "La violencia en Colombia", en *La Rana Dorada, Revista de Historia y Cultura*, Estocolmo. Disponible en: <http://hem.bredband.net/rivvid/> Fecha de consulta: 20/03/2012

Prensa

Diario Popular, 11 de abril de 1946

El Tiempo, 15 de octubre de 2006

<http://interesculashistoria.org/>